

AMPARO EN REVISIÓN 236/2017
QUEJOSAS Y RECURRENTES: ZARA
ASHELY SNAPP HARTMAN O ZARA
ASHLEY SNAPP HARTMAN Y OTRAS

PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: ALEJANDRO GONZÁLEZ
PIÑA
COLABORÓ: CARLOS EDUARDO MICHEL REGALADO

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día **siete de marzo de dos mil dieciocho**, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve el **amparo en revisión 236/2017**, promovido por **Zara Ashely Snapp Hartman o Zara Ashley Snapp Hartman** y otras personas, en contra de la sentencia autorizada el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto *********.

I. ANTECEDENTES

1. **Solicitud.** Mediante escritos presentados el once de noviembre de dos mil quince, **Zara Ashely Snapp Hartman, María Josefina Santacruz González, María Teresa Cecilia Autrique Escobar, Aram Saúl Tlacaelel Ramírez, Fernando Ramos Casas y Francisco Javier Mancera Arrigunaga** solicitaron al Comisionado de Autorización Sanitaria una

autorización para: *“la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos del “Cannabis Sativa” (sativa, indica americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinidol, los isómeros: Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como “marihuana”, consistente en la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transporte de las mismas y la importación y adquisición de la semilla: Esto es, solicito autorización sanitaria para que el peticionario pueda consumir marihuana regularmente y de la forma personal y con fines meramente lúdicos o recreativos. Asimismo, solicito la autorización para ejercer los derechos correctivos al auto-consumo de marihuana, tales como siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte e importación y adquisición de semillas, en cualquier forma, empleo, uso, consumo, importación y, en general todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de Marihuana por el peticionario, excluyendo expresamente los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma”* (sic) (fojas 101-103, 106-108, 111-113, 116-118, 121-123, 126-128 del juicio de amparo indirecto).

- 2. Contestación.** En respuesta a dichas solicitudes, la autoridad administrativa emitió los oficios ***** , ***** , ***** , ***** , el once de febrero de dos mil dieciséis, así como los diversos ***** y ***** , el doce de febrero de dos mil dieciséis, los cuales, en la parte que interesa, establecen lo siguiente:

“Con fundamento en los artículos 4º, párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,

fracción I, 17, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 1º, 2º, 3º, fracciones I, XXII y XXXVIII, 4º, fracción III, 13, inciso A, fracciones IX y X, 17 bis fracción IV, 194, 194 bis, 204, 234 en la parte que refiere “CANNABIS sativa, indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas”, 235, 236, 237, 368, 369, 370, 371, 372 y 391 bis de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 12, 14, 15, 15-A y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2, inciso C, fracción X, 36, 37 y 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3, fracciones VII y XIII, 4 fracción II, inciso c), 11 fracciones VI y XI y 14, fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; ésta Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a efectos de dar trámite a su solicitud de autorización: [...] presentada en fecha de 11 de noviembre de 2015, que se registró bajo el número de trámite [...]; esta autoridad le previene en los siguientes términos:

Que en relación a su solicitud de autorización sanitaria antes mencionada, esta autoridad sanitaria tras realizar un análisis a su escrito libre, se advierte que el promovente no acredita en ningún momento algún interés jurídico o en su caso un interés legítimo para solicitar la emisión de determinados actos por parte de ésta Comisión Federal, en especial lo referente a la autorización peticiónada, en consecuencia se le previene en los términos que se señalan a continuación a que acredite dicho interés.

(...)

Esto en atención a que el artículo 368 de la Ley General de Salud en el que se dispone que la autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta Ley y demás disposiciones generales aplicables.

(...)

Por ende, esta autoridad apercibe al solicitante para que en el término de 5 días hábiles contados a partir de la presente notificación acredite el interés jurídico y legítimo que le asiste para solicitar la emisión de una autorización sanitaria en los términos que refiere.

*Finalmente, se apercibe al promovente que en caso de que no desahogue la presente prevención dentro del plazo otorgado, su trámite será desechado.
(...).” [Énfasis añadido].*

II. TRÁMITE

- 3. Demanda de amparo indirecto.** Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, las personas solicitantes de la autorización promovieron demanda de amparo indirecto, en la que señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes (fojas 2 a 100 del juicio de amparo indirecto):

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

1. Congreso de la Unión

- *Cámara de Diputados*
- *Cámara de Senadores*

2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

3. Secretario de Gobernación

4. Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

5. *Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y,*
6. *Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación.*

IV. ACTOS RECLAMADOS:

1. *Del Congreso de la Unión, reclamamos la expedición de la Ley General de Salud del 26 de diciembre de 1983, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, en relación con los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, 248, 368 y 479; con todas sus consecuencias y efectos.*
2. *Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos reclamamos el decreto de 30 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, que promulga y manda publicar la referida Ley General de Salud; con todas sus consecuencias y efectos.*
3. *Del Secretario de Gobernación reclamamos el refrendo del aludido decreto promulgatorio de la Ley General de Salud y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984; con todas sus consecuencias y efectos.*
4. *Del Comisionado General de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, en su calidad de titular de esa dependencia administrativa, reclamamos los órdenes, instrucciones, indicaciones o acuerdos,*

*orales o escritos, que giro a su subordinado el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de esa Comisión, para que niegue la autorización solicitada por los quejosos mediante la aplicación concreta de los artículos 234, 235, 236, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, mediante la emisión de los oficios ***** , ***** , ***** , ***** , de fecha 11 de febrero de 2016, y los oficios ***** y ***** , de fecha 12 de febrero de 2016; con todas sus consecuencias y efectos.*

*5. Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, reclamamos la aplicación concreta de los artículos 234, 235, 236, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, en la emisión y suscripción de los oficios ***** , ***** , ***** , ***** , de fecha 11 de febrero de 2016, y los oficios ***** y ***** , de fecha 12 de febrero de 2016, ya sea que los haya emitido de propio imperio o por instrucciones de su titular; con todas sus consecuencias y efectos.*

6. Del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación reclamamos la publicación del Decreto Presidencial promulgatorio de la “Ley General de Salud”, en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, con todas sus consecuencias y efectos.” [Énfasis añadido].

4. La parte quejosa señaló como Derechos Fundamentales vulnerados los reconocidos en los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 25, 29 y 133 de la Constitución Federal; 1 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el preámbulo y artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; así como el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
5. **Trámite y resolución del juicio de amparo.** Conoció de la demanda el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante acuerdo de treinta de marzo de dos mil dieciséis ordenó registrarla con el número de expediente *********, la admitió a trámite, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, requirió a las autoridades responsables para que rindieran informe con justificación, tuvo por ofrecidas pruebas, así como señalando domicilio y autorizados (*ibídem*, fojas 135 a 137).
6. Seguidos los trámites correspondientes, el Juez de Distrito celebró audiencia constitucional el veintidós de junio de dos mil dieciséis y el veintidós de septiembre de ese mismo año terminó de engrosar la sentencia correspondiente, en la que decretó el sobreseimiento del juicio de amparo, en esencia, porque consideró que los oficios reclamados no constituían un acto de aplicación de las normas cuestionadas, ni la parte quejosa demostró que esas normas en efecto se hubieran aplicado (*ibídem*, fojas 256 a 274).

7. **Interposición del recurso de revisión.** **María Dolores Judith Aja Aguinaco**, como autorizada de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (fojas 3 a 44 del toca del Tribunal Colegiado).
8. **Admisión del recurso.** En acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis el Presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite el medio de impugnación, que se registró como amparo en revisión **335/2016** (*ibídem*, foja 45 y 46).
9. **Revisión adhesiva.** El ocho de noviembre de dos mil dieciséis se admitió el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la Directora Contenciosa de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente de la República (*ibídem*, fojas 72 a 74).
10. **Resolución del Tribunal Colegiado.** El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictó sentencia en sesión de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, en la que básicamente determinó lo siguiente: **(a)** en la materia del recurso de su competencia, revocó la sentencia sujeta a revisión; **(b)** levantó el sobreseimiento decretado por el juzgador de amparo; y **(c)** consideró carecer de competencia legal para conocer del problema de

constitucionalidad que subsiste, por lo que ordenó la remisión de los autos a este Alto Tribunal (*ibídem*, fojas 108 a 128).

11. **Trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.** Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, el Presidente de este Alto Tribunal tuvo por recibido el expediente, determinó que se asumía la competencia originaria para conocer del recurso y su adhesión, ordenó su registro con el número de amparo en revisión **236/2017**, destacó la existencia de precedentes sobre el problema de constitucionalidad subsistente, turnó el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y dispuso el envío a la Sala de su adscripción para el trámite de avocamiento respectivo (fojas 81 a 83 de este tomo).
12. **Radicación en Sala.** El veinticuatro de abril de dos mil diecisiete la Presidenta de la Primera Sala tuvo por recibidos los autos del asunto, determinó el avocamiento de esta instancia y ordenó el envío de las constancias a su ponencia, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo (*ibídem*, foja 107).
13. **Intervención ministerial.** La agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Alto Tribunal presentó intervención ministerial (*ibídem*, fojas 110 a 151). En acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete se tuvo a dicha agente realizando manifestaciones y se dispuso que se tomarían en cuenta en el momento procesal oportuno (*ibídem*, foja 152).

III. CONSIDERACIONES

- 14. Competencia.** Esta Sala es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto tercero, en relación con la fracción III del punto segundo del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo, 236, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud, y si bien subsiste en esta instancia el problema de constitucionalidad planteado, su resolución no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, ni tampoco existe alguna otra causa ni la solicitud por parte de algún Ministro para que este asunto lo resuelva el Tribunal Pleno.
- 15. Oportunidad y legitimación.** No es necesario analizar la oportunidad del recurso de revisión ni de su adhesión, tampoco la legitimación de las recurrentes, toda vez que de eso ya se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito, según se advierte de los considerandos segundo y tercero de la sentencia que dictó el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, en los autos del amparo en revisión **335/2016**, de su índice.

16. **Devolución al Tribunal Colegiado de Circuito.** Sin ignorar que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta asumía su competencia originaria para conocer del presente recurso de revisión, procede examinar si efectivamente se reúnen los requisitos para ello.
17. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dejó a salvo la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conociera y se pronunciara sobre la regularidad constitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud.
18. Del contenido de los artículos 107, fracción VIII, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹ y 83 de la Ley de Amparo,² se sigue que el recurso de revisión en amparo indirecto

¹ “**Art. 107.-** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[...]

VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno.

[...].”

² “**Artículo 83.** Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales colegiados de circuito los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine.”

es de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando en la demanda de amparo se hayan reclamado normas generales por estimarlas directamente violatorias de la Ley Fundamental o en la sentencia recurrida se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad; así como cuando el amparo se haya promovido por invasión a los ámbitos competenciales de alguno de los órdenes de gobierno (fracciones II y III del artículo 103 de la Constitución General).

19. En los demás casos, corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito del recurso de revisión en amparo indirecto, hecha la salvedad de los casos en los que se ejerza la facultad de atracción para conocer de algún asunto que revista interés y trascendencia.
20. Por su parte, el Acuerdo General 5/2013, relativo a los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y las reglas que deberán de observarse para el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en sus Puntos Cuarto, fracción I, inciso A) y Noveno, fracciones I, II y III, establece:

“CUARTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito:

I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando:

A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia.

Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación; [...].

NOVENO. En los supuestos a que se refiere el inciso A) de la fracción I del Punto Cuarto del presente Acuerdo General, el Tribunal Colegiado de Circuito procederá en los términos siguientes:

I. Verificará la procedencia de los recursos de revisión, así como de la vía y resolverá, en su caso, sobre el desistimiento o la reposición del procedimiento;

II. Abordará el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, examinará las formuladas por las partes cuyo estudio hubieren omitido el Juez de Distrito o el Magistrado Unitario de Circuito, así como las que advierta de oficio;

III. De resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en los supuestos de competencia delegada previstos en el Punto Cuarto, fracción I, incisos B), C) y D), de este Acuerdo General, el Tribunal Colegiado dejará a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le remitirá los autos, sin analizar los conceptos de violación expuestos, aun los de mera legalidad [...].”

21. Conforme a esas disposiciones, el conocimiento del recurso de revisión en amparo indirecto se delega a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se hubiera impugnado una ley federal o un tratado internacional, siempre que en la sentencia recurrida no se hubieran estudiado los planteamientos de constitucionalidad, al haberse sobreseído en el juicio respecto de la totalidad de los preceptos impugnados. Asimismo, conocerán de aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
22. Además, se establece que cuando el asunto no quede comprendido en los supuestos de competencia delegada, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá analizar los agravios relacionados con las *causales de improcedencia del juicio*, y en su caso, examinará las formuladas por

las partes cuyo estudio hubiera omitido el Juez de Distrito o el Magistrado Unitario de Circuito, así como las que advierta de oficio.

23. Luego, en caso de que el juicio de amparo resulte procedente y subsista el problema de constitucionalidad planteado, dejará a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo remitirle los autos respectivos.
24. En ese orden de ideas, para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda conocer de un amparo en revisión en el que se estime que subsiste uno o más temas de su competencia originaria, es necesario que el Tribunal Colegiado de circuito examine previamente la totalidad de las cuestiones de procedencia que hubieren sido planteadas por las partes o las que se hayan advertido en el juicio de forma oficiosa. Ello, con la finalidad de determinar si el estudio de las cuestiones de fondo, competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es o no procedente.
25. Al respecto, por identidad de razón, resultan ilustrativos los siguientes criterios de la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal.

“REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO AGOTA EL ESTUDIO DE TODAS LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE IMPIDAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO, DEBE DEVOLVÉRSELE EL EXPEDIENTE PARA QUE LO HAGA (ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). El punto quinto, fracción I, inciso A), del

Acuerdo General Número 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, otorgó competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para resolver las cuestiones de procedencia en los casos en que se hubiera impugnado, en amparo indirecto, una ley federal o un tratado internacional, o se hubiere planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, cuando el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, al dictar sentencia, no hubieren abordado el estudio de esas cuestiones por haber sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia; en tales supuestos, el propio acuerdo en su punto décimo primero, fracciones I, II y III, establece que el Tribunal Colegiado de Circuito abordará el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, examinará las formuladas por las partes cuyo estudio hubiere omitido el Juez de Distrito o el Magistrado Unitario de Circuito, así como las que advierta de oficio; asimismo, que de resultar procedente el juicio, el referido Tribunal Colegiado dejará a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal y le remitirá los autos, sin analizar los conceptos de violación expuestos, aun los de mera legalidad. Sin embargo, en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito se limite a estudiar el motivo de sobreseimiento decretado por el a quo, revocándolo y

remitiendo los autos a este Máximo Tribunal, sin hacerse cargo de las demás causales de improcedencia planteadas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, lo procedente es devolver los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para que dé cabal cumplimiento al acuerdo de mérito, ocupándose del estudio de la totalidad de las causas de improcedencia, y sólo en el caso de que llegue a desestimarlas y no exista motivo alguno que impida el análisis de fondo de inconstitucionalidad, deje a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le remita los autos respectivos.”³

“REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DEVOLVER LOS AUTOS A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CUANDO ADVIERTA QUE NO FUE ESTUDIADA ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LAS PARTES (ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001). Del punto quinto, fracción I, inciso A), en relación con el décimo primero, fracción II, ambos del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2001, se advierte que a éstos corresponde resolver la totalidad de las cuestiones de

³ Novena Época. Registro: 185321. Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 85/2002. Página: 207.

procedencia en los asuntos en que se hubiera impugnado en amparo indirecto una ley federal, un tratado internacional o se hubiere planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, al dictar sentencia, hubieren omitido el estudio de alguna o algunas causas de improcedencia planteadas por las partes, motivo por el cual le corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito agotar esos temas, pues el citado acuerdo le reservó su conocimiento expresamente para que, partiendo de esa premisa, las cuestiones propiamente constitucionales correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, si en esta instancia de control constitucional, incluso ante la ausencia de agravio específico respecto de esa omisión, se observa que el Tribunal Colegiado de Circuito no agotó el examen de las apuntadas cuestiones de procedencia, deberá ordenarse la devolución del expediente para que analice éstas y las que operen de oficio, a fin de que asuma su competencia en los términos del indicado Acuerdo 5/2001.”⁴

- 26.** En el caso concreto, en la demanda de amparo se señalaron como actos reclamados los artículos 234, 235, último párrafo, **236**, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud. Lo anterior, porque, por una parte, reclamó del Congreso de la Unión la expedición de esos artículos, *sin incluir* el 236, pero en seguida reclamó como primer acto de aplicación de esos artículos, *incluido* el 236, distintos actos administrativos.

⁴ Novena Época. Registro: 178317. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 61/2005. Página: 523.

27. En la sentencia recurrida, el juzgador de amparo precisó los actos reclamados en los siguientes términos:

“SEGUNDO. De acuerdo con los criterios resaltados, así como de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados, se debe acudir al estudio integral de la demanda de garantías, sin atender a calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, desprendiéndose, por ende, que el acto reclamado consiste en:

- La expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se expide la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, específicamente los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, 248, 368 y 479.
- Los oficios *****, *****, *****, *****, todos de **once de febrero de dos mil dieciséis.**
- Los oficios ***** y *****, ambos de **doce de febrero de dos mil dieciséis.**

Asimismo, debido a que no se combaten por vicios propios, se deja de tener como actos reclamados los relativos al refrendo y la publicación del citado decreto, actos atribuidos al Secretario de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo.

Precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, a fin de que, posteriormente, se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en su caso, la constitucionalidad de los mismos.” (fojas 259 vuelta y 260 del juicio de amparo indirecto).

28. De esa transcripción puede observarse que el Juez de amparo, al delimitar la litis constitucional, **no** consideró como acto reclamado el artículo 236 de la Ley General de Salud. Sin embargo, en el único punto resolutivo de ese fallo, se dispuso lo siguiente:

*“**ÚNICO.** Se **SOBRESEE** en el juicio de amparo, promovido por **Zara Ashely Snapp Hartman, María Josefina Santacruz González, María Teresa Cecilia Autrique Escobar, Aram Saúl Tlacaoel Ramírez, Fernando Ramos Casa y Francisco Javier Mancera Arrigunaga**, respecto de la expedición y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, específicamente los artículos 234, 235, último párrafo, **236**, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, 248, 368 y 479; así como por los oficios *********, *********, *********, *********, todos de **once de febrero de dos mil dieciséis**, así como los oficios ********* y *********, ambos de **doce de febrero de dos mil dieciséis**, de conformidad a lo dispuesto en los considerandos tercero y último de este fallo.” (Ibídem, fojas 274 y vuelta) [El subrayado es propio].*

29. Como se ve, existe una incongruencia interna de la sentencia de amparo que no advirtió el Tribunal Colegiado de Circuito, pues al revocar la resolución sujeta a revisión, levantar el sobreseimiento del juicio inicialmente decretado y reservar jurisdicción a este Alto Tribunal, lo hizo únicamente para que se pronunciara respecto de la constitucionalidad de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud (véase la página 39 de la resolución del Tribunal Colegiado de circuito); no así respecto del artículo 236 de ese mismo ordenamiento, respecto del cual, omitió pronunciarse, a pesar de que el juicio fue sobreseído respecto del mismo en el resolutivo transcrito.
30. De lo anterior se sigue que, aparentemente, subsiste el sobreseimiento decretado respecto del artículo 236 de la Ley General de Salud, pues el Tribunal Colegiado de Circuito no se pronunció al respecto, como era su deber, conforme a la siguiente jurisprudencia:

“SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO.

Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de

*corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, **al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma**, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: ‘SENTENCIA DE*

AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele.”⁵

31. En efecto, en la sentencia recurrida existe una incongruencia, pues aunque el artículo 236 de la Ley General de Salud, mencionado en la demanda de amparo, no se tuvo como acto reclamado, en el resolutivo se determinó el sobreseimiento respecto de, entre otros, ese artículo. Por lo tanto, antes de que el Tribunal Colegiado pudiera pronunciarse sobre la cuestión de la improcedencia o no del juicio respecto de las normas reclamadas, y *específicamente, respecto del artículo 236 citado*, debió corregir la incongruencia advertida, pues ello es un presupuesto necesario para resolver la cuestión de procedencia en este caso, esto es, debió determinar, en primer lugar, si se trata o no de un acto reclamado, y en segundo lugar, si es el caso, pronunciarse

⁵ Época: Novena Época, Registro: 192836, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 133/99, Página: 36

sobre la procedencia del juicio respecto de esa disposición en específico.

32. Por otra parte, durante la substanciación del juicio de amparo, el Director General de Asuntos Jurídicos de la **Cámara de Senadores del Congreso de la Unión**, al rendir informe justificado (foja 162 del juicio de amparo indirecto), señaló que era cierto el acto reclamado a la autoridad que representaba, sin embargo, sostuvo que la sola discusión, votación y aprobación de la normatividad impugnada no causaba afectación alguna a los intereses jurídicos de la parte quejosa, porque la afectación que reclamó no derivaba del procedimiento legislativo, sino de un acto de ejecución posterior e independiente a las facultadas de esa autoridad.
33. En ese sentido, si bien esa autoridad no mencionó expresamente el fundamento legal, por referirse al interés jurídico de la parte quejosa, debe entenderse que invocó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y pretendió que se decretara el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento.
34. En la sentencia de amparo, el Juez de Distrito se limitó a decretar el sobreseimiento del juicio respecto de los actos reclamados al considerar que no se demostró la existencia de un acto de aplicación de las normas controvertidas, sobreseimiento que se hizo extensivo a los oficios reclamados, al no reclamarse por vicios propios, sino que se reclamaron como actos de aplicación de las normas y –según concluyó el Juez– no lo eran.

35. Al respecto, el Juez de Distrito no realizó consideración alguna en torno a las manifestaciones de la referida autoridad responsable.
36. En el recurso de revisión interpuesto en contra de esa resolución, la autorizada de la parte quejosa se limitó a expresar agravios para demostrar que los oficios reclamados sí constituían un acto de aplicación de las normas controvertidas.
37. En vista de los agravios, el Tribunal Colegiado, en la materia del recurso que era de su competencia, revocó la sentencia sujeta a revisión, levantó el sobreseimiento del juicio de amparo decretado únicamente respecto de los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, 248, 368 y 479, de la Ley General de Salud y, al emprender el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes, no se pronunció respecto de la alegada por esa autoridad responsable.
38. Bajo ese contexto, en razón de que la sentencia de amparo es incongruente internamente respecto del estatus jurídico del artículo 236 de la Ley General de Salud, artículo respecto del cual se decretó el sobreseimiento en el resolutivo respectivo y el Tribunal Colegiado no se pronunció sobre esta cuestión, y considerando que la causa de improcedencia invocada por la *Cámara de Senadores del Congreso de la Unión* no fue analizada por el Juez de Distrito, es necesario que el Tribunal Colegiado de Circuito se haga cargo de esos aspectos, en términos de lo dispuesto en el punto Noveno, fracción II, del Acuerdo General 5/2013, pues es evidente que su estudio podría derivar en el sobreseimiento del juicio.

39. Luego, la omisión de analizar esas cuestiones relacionadas con la procedencia del juicio de amparo, imposibilita a esta Primera Sala realizar el estudio de constitucionalidad de las normas cuestionadas por la parte quejosa.
40. En consecuencia, lo procedente es devolver los autos al Tribunal Colegiado que previno para que se ocupe de las cuestiones de procedencia cuyo estudio fue omitido en la sentencia recurrida, incluida la incongruencia de aquella resolución, por ser una cuestión de su competencia delegada, en términos de lo establecido en el punto Noveno, fracción II, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
41. Similar criterio sostuvo esta Sala al resolver, entre otros, los amparos en revisión 736/2015⁶, 1099/2015⁷, 1367/2015⁸, 1416/2015⁹ y 498/2016¹⁰.

Por lo expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

⁶ *Sentencia de veinte de enero de dos mil dieciséis*. Aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

⁷ *Sentencia de trece de abril de dos mil dieciséis*. Resuelto por unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Norma Lucía Piña Hernández y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

⁸ *Sentencia de once de mayo de dos mil dieciséis*. Fallado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente) y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

⁹ *Sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis*. Aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente el Ministro José Ramón Cossío Díaz (Ponente).

¹⁰ *Sentencia de once de enero de dos mil diecisiete*. Resuelto por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández (Presidenta y Ponente).

RESUELVE:

ÚNICO. Devuélvanse los autos al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para los efectos precisados en la última parte de la presente resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos al lugar de su origen; y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández (Presidenta y Ponente), con voto en contra de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y José Ramón Cossío Díaz.

Firman la Ministra Presidenta de la Sala y Ponente con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTA DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

“En términos de lo previsto en los artículos 3º, fracción II, 13, 14 y 18, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.